

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

INE/CG774/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

DENUNCIANTE: JESÚS EDUARDO SOLÍS
HERNÁNDEZ Y OTRAS PERSONAS

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR JESÚS EDUARDO SOLÍS HERNÁNDEZ Y OTRAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS POSIBLEMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, QUIEN SUPUESTAMENTE USÓ PARA TAL EFECTO, SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO, SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O

<i>Comisión</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

<i>Instituto o INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PRI o denunciado</i>	Partido Revolucionario Institucional
<i>quejosos o denunciantes</i>	Jesús Eduardo Solís Hernández, Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Lilia Pineda Méndez, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Noemí Morales Sixtos, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Rodrigo Abonza Salazar, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria, Erika Escobedo Castro y Sergio Tirado de la Cruz
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Unidad Técnica o UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. ACUERDO INE/CG33/2019¹. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual se determinó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

En este sentido, en el punto de acuerdo TERCERO del citado acuerdo, se determinó lo siguiente:

¹ Consultable en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/> CG1ex201901-23-ap-14.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Asimismo, se precisó que los procedimientos sancionadores ordinarios cuya suspensión pudiera generar la caducidad de la potestad sancionadora por parte de esta autoridad, en términos de la jurisprudencia 9/2018, emitida por la Sala Superior, o sobre los cuales recayera una orden expresa de resolución por parte del mencionado órgano jurisdiccional, continuarían con la instrucción ordinaria.

II. INFORME SOBRE EL ACUERDO INE/CG33/2019. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó al Consejo General el Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (**INE/CG33/2019²**), mediante el cual, hizo del conocimiento que los siete partidos políticos, entre ellos el *PVEM*, durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

III. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del *INE* emitió el Acuerdo **INE/JGE34/2020**, por el que ***SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19***, en cuyo punto **Octavo** se determinó lo siguiente:

“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia

² Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”.

[Énfasis añadido]

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General emitió el Acuerdo **INE/CG82/2020**, denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19**, en el que, entre otras medidas, se estableció la siguiente:

“Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.”³

Finalmente, con el propósito de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el Acuerdo **INE/JGE45/2020**, de rubro **ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS**, mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del *INE*, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.

³ En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Cabe mencionar, que las anteriores determinaciones no resultan ser un obstáculo legal para que, en el presente caso, durante este periodo de contingencia la Comisión pueda válidamente sesionar y, en su caso, aprobar el presente proyecto para su posterior conocimiento y resolución, en cuanto existan las condiciones para hacerlo, por parte del *Consejo General*.

Esto es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafos 1 y 2 de la *LGIPE*, la *Comisión*, así como las otras tantas comisiones que integran a este Instituto, se erigen como instancias internas de apoyo que contribuyen al desempeño de las atribuciones del propio *Consejo General* y, en ese sentido, la determinación que asuma ese ente, respecto a la aprobación o no del proyecto que le es sometido a consideración por parte de la *UTCE*, no transgrede ni vulnera ningún derecho o garantía procesal de las partes involucradas.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 469 de la *LGIPE*, **concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la UTCE pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.**

De lo anterior, se sigue que la remisión del anteproyecto de resolución por parte de la *UTCE* a la *Comisión*, se lleva a cabo como un acto intraprocesal más una vez concluida la investigación, para que las personas integrantes de la *Comisión* determinen si la investigación está suficientemente realizada o si es necesario continuar con la misma, de donde pasará como proyecto a *Consejo* en donde se resolverá por la votación de sus integrantes dando fin al procedimiento. Es decir, la etapa de remisión de la propuesta de resolución a los integrantes de la *Comisión* se da una vez cerrada la instrucción del procedimiento, de modo que, hasta el momento en que se resuelva por el *Consejo General*, ya no existen fases procesales pendientes que deban hacerse del conocimiento a darle intervención a las partes.

Con ello, se concluye que la suspensión a que se refieren los acuerdos citados en el presente resultando, no impactan ni merman las labores que pueda realizar la *Comisión* aún en este periodo de suspensión, toda vez que su labor en este periodo,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

se lleva a cabo con el propósito de avanzar con los trabajos de revisión de los proyectos propuestos por la UTCE, para su posterior aprobación por parte del *Consejo General*, quien es la única instancia que tiene la potestad de resolver los procedimientos ordinarios sancionadores como el que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en párrafo 5, del multicitado artículo 469 de la *LGPE*.

IV. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ordinarios.

V. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES. El veintidós de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados designó por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.

VI. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobado el Acuerdo **INE/CG172/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL** en el que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la Comisión de Quejas.

VII. REACTIVACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso **INE/CG238/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.**

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:

Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este Acuerdo.

En este sentido, mediante acuerdo uno de septiembre de dos mil veinte,⁴ la Unidad Técnica reactivó los plazos en el presente procedimiento.

VIII. DENUNCIAS. Mediante sendos oficios⁵, diversos órganos subdelegacionales de este Instituto hicieron del conocimiento a la UTCE las quejas que dieron lugar al presente procedimiento, las cuales fueron presentadas por diversas personas en contra del PVEM, ya que presuntamente fueron indebidamente afiliadas a dicho partido político, haciendo para tal efecto el uso no autorizado de sus datos personales.

IX. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y BAJA DE LAS PERSONAS QUEJOSAS DEL PADRON DE MILITANTES DEL PVEM. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte⁶ la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar las quejas mencionadas bajo el número de expediente citado al rubro; admitirlas a trámite y reservar su emplazamiento hasta contar con mayores elementos para determinar la existencia de las infracciones denunciadas y la probabilidad de que el PVEM las haya cometido. Asimismo, se requirió al PVEM y a la DEPPP, a efecto de que señalaran si las personas quejosas fueron afiliadas al denunciado, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del citado partido político, las cédulas de afiliación correspondientes. Del mismo modo, se ordenó la baja de los denunciantes del padrón de militantes respectivo.

⁴ Visible a fojas 189 a 194 del expediente.

⁵ Visible a fojas 1 a 164 del expediente

⁶ Visible a fojas 165 a 175 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

X. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO AL PVEM. Mediante oficio PVEM-INE-198/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte,⁷ el denunciado dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que las personas quejasas si fueron sus afiliados, sin embargo, actualmente se encuentran dadas de baja de su padrón de militantes.

Del mismo modo, mediante oficios PVEM-INE-210/2020⁸ y PVEM-INE-235/2020⁹, el PVEM exhibió el original de catorce cédulas de afiliación de igual número de personas quejasas para demostrar su legal incorporación a su padrón de militantes.

XI. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA DEPPP. Mediante correo electrónico institucional de veinticinco de noviembre de dos mil veinte,¹⁰ el Titular de la *DEPPP*, informó que las personas quejasas si fueron afiliadas al partido político denunciado en distintas fechas; sin embargo, fueron dadas de baja el dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

XII. ESCISIÓN. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno¹¹ se escindió la queja presentada por Ludivina Santana Gómez, toda vez que los hechos de los que se duele fueron atribuidos al Partido Conciencia Social Popular, Partido político local de San Luis Potosí.

XIII. EMPLAZAMIENTO Y VISTA. Mediante proveído dieciséis de febrero de dos mil veintiuno¹², la Unidad Técnica ordenó emplazar al *PVEM*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndosele traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

⁷ Visible a fojas 259 a 260 del expediente.

⁸ Visible a fojas 333 a 358 del expediente.

⁹ Visible a fojas 388 a 392 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 359 a 361 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 414 a 420 del expediente.

¹² Visible a fojas 227 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
<p>Citatorio. 22/02/2021¹³</p> <p>Cédula. 23/02/2021¹⁴</p>	<p>Escrito 02/03/2021¹⁵</p> <p>de</p>	<p>El PVEM no afilió indebidamente a las personas quejasas del presente procedimiento, ni utilizó, sin su autorización, sus datos personales para tal efecto, ya que su incorporación al padrón de militantes respectivos fue de manera libre y bajo el procedimiento establecido en sus estatutos.</p> <p>Que los datos personales utilizados en las afiliaciones cuestionadas fueron proporcionados voluntariamente por las personas quejasas.</p> <p>Que las afiliaciones cuestionadas son lícitas, tal como se demuestra con el original de las cédulas de afiliación aportadas al sumario.</p> <p>Que, en el caso de Jesús Eduardo Solís Hernández, Yadira Ponce Aguilar e Itzayana Noriko Casillas Vallejo, su denuncia obedeció a la intención de participar como supervisores y/o capacitadores- asistentes electorales en el proceso electoral 2020-2021, ya que fueron afiliados en el 2016, sin que en el periodo 2016-2019, hayan presentado queja alguna.</p> <p>Que actualmente las personas quejasas no se encuentran afiliadas al PVEM, ya que fueron dados de baja del padrón de militantes respectivo.</p> <p>Que no existe prueba alguna que demuestre la infracción atribuida al PVEM, sino que contrario a lo afirmado por las personas quejasas y con base en las cédulas de afiliación aportadas, debe operar en su favor el principio de presunción de inocencia.</p> <p>Que el PVEM ha cumplido en tiempo y forma con el Acuerdo INE/CG33/2019.</p>

Asimismo se dio vista a Sergio Tirado de la Cruz, Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Lilia Pineda Méndez, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Yadira Ponce Aguilar, Graciela González Mercado, Rosa María Intzin Meza, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruíz, Martín Leobardo Soría, Raúl Cruz Calvo y Adileni de Jesús Cruz García, **con copia simple del**

¹³ Visible a fojas 437 a 438 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 439 a 442 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 541 a 554 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

original de las cédulas de afiliación respectivas, mediante el cual, el denunciado, pretende justificar la licitud de la afiliación cuestionadas.

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Sergio Tirado de la Cruz	19/02/2021 ¹⁶ Se entendió con personal de la representación y se notificó por estrados.	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ¹⁷	No ¹⁸
Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar	19/02/2021 ¹⁹ Se entendió con el quejoso	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ²⁰	No ²¹
Lilia Pineda Méndez	19/02/2021 ²² Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ²³	No ²⁴
Tania Sucel Pérez Cruz	22/02/2021 ²⁵ Se entendió con la quejosa	Del 23 al 25 de febrero de 2021	SI ²⁶ Manifiesto Tania Sucel Pérez que la afiliación de la campaña Verde Ecologista de México, no fui afiliada con mi consentimiento de la fecha 29 de marzo de 2019, además en el formato con el folio

¹⁶ Visible a fojas 446 a 448 del expediente

¹⁷ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

¹⁸ Visible a foja 586 del expediente

¹⁹ Visible a fojas 561 a 563 del expediente

²⁰ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

²¹ Visible a foja 585 del expediente

²² Visible a fojas 449 a 453 del expediente

²³ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

²⁴ Visible a foja 576 del expediente

²⁵ Visible a fojas 608 a 613 del expediente

²⁶ Visible a foja 614 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
			2019-0702187, tiene muchas irregulares, escolaridad, número teléfono, celular y firma
María Dilery Nuricumbo Paredes	19/02/2021 ²⁷ Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ²⁸	No ²⁹
Yadira Ponce Aguilar	23/02/2021 ³⁰ Se entendió con la quejosa	Del 24 al 26 de febrero de 2021	No ³¹
Graciela González Mercado	19/02/2021 ³² Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ³³	No ³⁴
Rosa María Intzin Meza	19/02/2021 ³⁵ Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ³⁶	No ³⁷
Adriana Medeguín Olvera	22/02/2021 ³⁸ Nadie atendió la diligencia Se notificó por estrados	Del 23 al 25 de febrero de 2021	No ³⁹

²⁷ Visible a fojas 602 a 607 del expediente

²⁸ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

²⁹ Visible a foja 523 del expediente

³⁰ Visible a fojas 571 a 573 del expediente

³¹ Visible a foja 588 del expediente

³² Visible a fojas 461 a 464 del expediente

³³ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

³⁴ Visible a foja 584 del expediente

³⁵ Visible a fojas 914 a 915 del expediente

³⁶ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

³⁷ Visible a foja 911 del expediente

³⁸ Visible a fojas 503 a 522 del expediente

³⁹ Visible a foja 580 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Diana Paola Casillas Torres	22/02/2021 ⁴⁰ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 23 al 25 de febrero de 2021	No ⁴¹
Gloria Puga Ruíz	19/02/2021 ⁴² Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ⁴³	No ⁴⁴
Martin Leobardo Soría	19/02/2021 ⁴⁵ Se entendió con el quejoso	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ⁴⁶	No ⁴⁷
Raúl Cruz Calvo	19/02/2021 ⁴⁸ Se entendió con el quejoso	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ⁴⁹	No ⁵⁰
Adileni de Jesús Cruz García	19/02/2021 ⁵¹ Se entendió con la quejosa	Del 22 al 24 de febrero de 2021 ⁵²	No ⁵³

XIV. ACUERDO DE ALEGATOS. Mediante proveído de veintiocho de julio del año próximo pasado⁵⁴ para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Al respecto, no obstante que las partes

⁴⁰ Visible a fojas 493 a 500 del expediente

⁴¹ Visible a foja 580 del expediente

⁴² Visible a fojas 470 a 476 del expediente

⁴³ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

⁴⁴ Visible a foja 580 del expediente

⁴⁵ Visible a fojas 479 a 485 del expediente

⁴⁶ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

⁴⁷ Visible a foja 580 del expediente

⁴⁸ Visible a fojas 566 a 568 del expediente

⁴⁹ Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

⁵⁰ Visible a foja 585 del expediente

⁵¹ Visible a fojas 557 a 560 del expediente

⁵² Sin contar sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021, por ser inhábiles.

⁵³ Visible a foja 585 del expediente

⁵⁴ Visible a fojas 615 a 621 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

fueron debidamente notificadas, solamente comparecieron a formular alegatos, el PVEM y Graciela González Mercado quienes manifestaron lo siguiente:

Persona notificada	Fecha de notificación	Fecha de contestación y alegatos
PVEM	02/08/2021 ⁵⁵ Se entendió con personal de la representación y se notificó por estrados.	Escrito de 09/08/2021 ⁵⁶ Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento. Adicionalmente señaló que la cédula digital de afiliación de Rodrigo Abonza Salazar resulta valida porque contiene los requisitos mínimos exigidos en el Acuerdo INE/CG231/2019 y las disposiciones legales aplicables.
Graciela González Mercado	30/07/2021 ⁵⁷ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Si presentó ⁵⁸ “... <i>Que si tengo una prueba que anexar que es una copia de la credencial de elector folio #0192110535990 donde se muestra mi firma y datos y que dicha firma No es igual a la aportada por el Partido Verde Ecologista de México...</i> <i>Mi firma es mi nombre Graciela en manuscrito y seguido de “g” de mi apellido González, seguido “m” de mi 2° apellido Mercado, además por ser dilexica (sic) omito la vocal “e” en mi nombre.</i> <i>Asimismo, en ese formato muestra mi escolaridad como “Secundaria” y yo tengo preparatoria terminada desde 2007 y 2 años de carrera trunca, por lo que vuelvo a confirmar que yo no firme ningún documento ni proporcioné datos al Partido verde Ecologista de México por lo Que desconozco esa Firma en</i>

⁵⁵ Visible a fojas 635 a 640 del expediente

⁵⁶ Visible a fojas 848 a 865 del expediente

⁵⁷ Visible a fojas 702 a 704 del expediente

⁵⁸ Visible a fojas 868 a 870 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Fecha de contestación y alegatos
		<i>ese formato que muestra una “p” y una “n” en vez de una “g” y “m”.</i>

XV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno⁵⁹ se requirió a la DERFE diversa información entorno a la *cédula del expediente electrónico* de Rodrigo Abonza Salazar. Asimismo, se ordenó verificar el sitio Web del PVEM a efecto de verificar si efectivamente dio de baja a las personas quejas de su padrón de militantes.

En este sentido mediante acta circunstanciada⁶⁰ de la misma data se pudo constatar que las personas quejas fueron dadas de baja del citado padrón.

XVI. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE LA DERFE. Mediante correo electrónico de doce de noviembre del año próximo pasado⁶¹ la DERFE dio cumplimiento al requerimiento de información formulada por la UTCE, remitiendo la *cédula del expediente electrónico* de Rodrigo Abonza Salazar.

XVII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante oficio PVEM-INE-557/2020, signado por el representante propietario del PVEM ante el Consejo General de este Instituto, se exhibió el original de la cédula de afiliación correspondiente a Itzayana Noriko Vallejo Casilla

XVIII. ESCISIÓN DE QUEJA; REPOSICIÓN DE ALEGATOS Y VISTA PERSONAS QUEJOSAS. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós⁶² se escindió la queja de Gloria Mercado González y se ordenó instaurar un nuevo procedimiento con el objeto de practicar la prueba pericial en materia de grafoscopia para determinar la autenticidad o falsedad de la firma contenida en la cédula de afiliación de dicha quejosa, aportada por el denunciado.

⁵⁹ Visible a foja 941 a 947 del expediente

⁶⁰ Visible a foja 950 a 958 del expediente

⁶¹ Visible a foja 966 a 972 del expediente

⁶² Visible a fojas 558 a 562 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

De igual forma, a efecto de garantizar el derecho de contradicción, se dio vista a Itzayana Noriko Vallejo Casillas, con copia simple del original de la cédula de afiliación al partido denunciado; y a Rodrigo Abonza Salazar, con una copia de la *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político*, exhibidas respectivamente por el instituto político denunciado y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

Asimismo, para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
PVEM	21/09/2022 ⁶³	Del 22/09/2022 al 28/09/2022 ⁶⁴	Escrito de 28/09/2022 ⁶⁵ Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento y alegatos del 28 de julio del 2021.
Jesús Eduardo Solís Hernández	22/09/2022 ⁶⁶ Se entendió con persona autorizada por el quejoso	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁶⁷	No presentó
Jaime Alfonso Vázquez Zaldivar	26/09/2022 ⁶⁸ Se notificó por estrados	Del 27/09/2022 al 03/10/2022 ⁶⁹	No presentó

⁶³ Visible a fojas 565 a 571 del expediente

⁶⁴ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁶⁵ Visible a fojas 576 a 579 del expediente

⁶⁶ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁶⁷ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁶⁸ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁶⁹ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
Lilia Pineda Méndez	23/09/2022 ⁷⁰ Se entendió con la quejosa	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁷¹	No presentó
Tania Sucel Pérez Cruz	22/09/2022 ⁷² Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁷³	No presentó
María Dilery Nuricumbo Paredes	22/09/2022 ⁷⁴ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁷⁵	No presentó
Yadira Ponce Aguilar	23/09/2022 ⁷⁶ Se entendió con la quejosa	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁷⁷	No presentó
Noemí Morales Sixtos	22/09/2022 ⁷⁸ Se entendió con la quejosa	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁷⁹	No presentó
Graciela González Mercado	22/09/2022 ⁸⁰ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁸¹	Únicamente se notificó el acuerdo de escisión
Itzayana Noriko Vallejo Casillas	23/09/2022 ⁸² Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁸³	No presentó

⁷⁰ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁷¹ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁷² Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁷³ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁷⁴ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁷⁵ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁷⁶ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁷⁷ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁷⁸ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁷⁹ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁸⁰ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁸¹ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁸² Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁸³ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
Rosa María Intzin Meza	27/09/2022 ⁸⁴ Se entendió con la quejosa	Del 28/09/2022 al 04/10/2022 ⁸⁵	No presentó
Rodrigo Abonza Salazar	23/09/2022 ⁸⁶ Se entendió con el quejoso	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁸⁷	<p>Si presentó</p> <p>“ . . .</p> <p>El archivo digital de la cédula aportada por dicho partido es apócrifo por aparecer inscrito indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados. Ya que no cuenta con la voluntad del ciudadano para afiliarse, ratificar, ni mucho menos refrendar su militancia a ese Partido Político Nacional...Señalando lo siguiente:</p> <p>Primero.- Tengo una prueba que anexar que es una copia de la credencial de elector, con folio #1069053698678, donde se muestra mi firma y datos y que dicha firma no es igual a la aportada por el Partido Verde Ecologista de México. . .</p> <p>Aunado a lo anterior el quejoso aporta copia de su credencial de elector como medio de prueba idóneo, no solo para justificar las razones que sostienen su objeción, sino también para contrastar la firma tildada de falsa con la indubitada que</p>

⁸⁴ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁸⁵ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

⁸⁶ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁸⁷ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
			<p>aparece en la citada credencial de elector. . .</p> <p>Segundo.- Las pruebas ofrecidas por el Partido Verde Ecologista de México las cuales están conformadas por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la credencial para votar original, la fotografía viva que presentan del ciudadano y sobre todo la firma manuscrita digitalizada de Rodrigo Abonza Salazar presentada por el Partido Verde Ecologista, aspecto que no reconozco de la prueba que presentan es que la firma manuscrita digitalizada de Rodrigo Abonza Salazar, no corresponde a la firma que utilizó para todos mis documentos personales, de los cuales anexo copias simples, como lo son copia de mi cédula profesional, copia de la cartilla del servicio militar, copia del certificado de la Universidad, copia del certificado de preparatoria, copia de credencial del INEGI, copia de credencial del INE, copia de documentos del INE...</p> <p>Tercero. – Para determinar si la firma cuestionada es autentica o apócrifa... le solicito de una forma respetuosa que ordene la</p>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
			práctica de una prueba pericial en materia de grafoscopia para el análisis de la firma contenida en la cédula de afiliación de Rodrigo Abonza Salazar, con el objeto de determinar si la misma corresponde al puño y letra del quejoso o si por el contrario resulta falsa como afirma el denunciante
Adriana Medeguín Olvera	22/09/2022 ⁸⁸ El quejosos ya no vivió en el domicilio señalado Se notificó por estrados	Del 23/09/2022 al 29/09/2022 ⁸⁹	No presentó
Diana Paola Casillas Torres	23/09/2022 ⁹⁰ Se entendió con la quejosa	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁹¹	No presentó
Gloria Puga Ruíz	26/09/2022 ⁹² Se entendió con persona diversa a la quejosa (esposo) Se notificó por estrados	Del 27/09/2022 al 03/10/2022 ⁹³	No presentó
Martin Leobardo Soría	23/09/2022 ⁹⁴ Se entendió con el quejoso	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ⁹⁵	No presentó

⁸⁸ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁸⁹ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁹⁰ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁹¹ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

⁹² Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁹³ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

⁹⁴ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁹⁵ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
Raúl Cruz Calvo	26/09/2022 ⁹⁶ Se notificó por estrados	Del 27/09/2022 al 03/10/2022 ⁹⁷	No presentó
Adileni de Jesús Cruz García	26/09/2022 ⁹⁸ Se notificó por estrados	Del 27/09/2022 al 03/10/2022 ⁹⁹	No presentó
Erika Escobedo castro	29/09/2022 ¹⁰⁰ Se entendió con la quejosa	Del 30/09/2022 al 06/10/2022 ¹⁰¹	No presentó
Sergio Tirado de la Cruz	23/09/2022 ¹⁰² Se entendió con el quejoso	Del 26/09/2022 al 30/09/2022 ¹⁰³	No presentó

XIX. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la *Unidad Técnica* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las personas quejasas fueron dadas de baja del padrón de militantes del *PVEM*, sin que hubiesen sido reincorporadas al mismo.

XX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión*.

XXI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En su Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, **en lo general**, por unanimidad de votos de sus

⁹⁶ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁹⁷ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

⁹⁸ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

⁹⁹ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

¹⁰⁰ Visible a fojas 880 a 881 del expediente

¹⁰¹ Sin contar sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 por ser inhábiles

¹⁰² Visible a fojas 880 a 881 del expediente

¹⁰³ Sin contar sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 por ser inhábiles

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

integrantes presentes; y, en lo particular, por cuanto hace al resolutivo PRIMERO de esta resolución respecto de la C. Tania Sucel Pérez Cruz, por mayoría de dos votos de sus integrantes, con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y y), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación de las personas quejasas, utilizando para ello indebidamente sus datos personales, por parte del *PVEM*.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, consistente, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de las personas quejasas.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA

Con el propósito de dar mayor claridad a resolución que nos ocupa, este Consejo General estima oportuno señalar que aun cuando las quejas presentadas por Ludivina Santana Gómez y Graciela Mercado González, fueron admitidas a trámite, no serán objeto de pronunciamiento en el presente procedimiento atendiendo a los razonamientos siguientes:

a. Queja de Ludivina Santana Gómez

De las investigaciones realizadas por la autoridad electoral, la información aportada por la DEPPP y el denunciado, se pudo determinar que la quejosa no fue afiliada por el PVEM sino por el Partido Político Local Conciencia Social Popular, motivo por el cual, con el propósito de asegurar a la citada ciudadana el acceso a la justicia, conforme a lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como el artículo 13, párrafos 2, 3 y 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias, la UTCE **escindió la queja** en comento y la remitió a la autoridad local competente para los efectos legales pertinentes, ya que este Instituto resultaba incompetente para pronunciarse al respecto, con independencia de la existencia o no de la infracción denunciada.

b. Queja de Graciela González Mercado

Una vez que dicha queja fue admitida a trámite, y derivado de la existencia del hecho infractor denunciado, su apariencia ilícita y la probabilidad de que el PVEM lo haya cometido o participado en su comisión, mediante auto de dieciséis de febrero del año próximo pasado, la UTCE emplazó al PVEM, a efecto de que respondiera por los hechos imputados. Asimismo, mediante el citado proveído, se dio vista a Graciela González Mercado con copia de la cédula de afiliación aportada por el denunciado,

Por otro lado, mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno se turnaron los autos a vista de alegatos, y como resultado de ello, Graciela González Mercado objetó la referida cédula de afiliación, cuestionando la autenticidad de su firma.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Al respecto, del análisis al contenido de dicha objeción, mediante auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, la UTCE determinó **escindir la queja** de Graciela González Mercado e instaurar un nuevo procedimiento con el propósito de desahogar una prueba pericial en materia de grafoscopia en la que se dilucidara la autenticidad o falsificación de la firma contenida en la cédula de la citada quejosa, es decir, si la firma cuestionada pertenecía o no al puño y letra de Graciela González Mercado.

No se pasa por alto señalar que la instauración de ese nuevo procedimiento para los fines referidos obedeció a la exigencia de garantizar a las personas quejas restantes el acceso a una justicia expedita y pronta. Así, con motivo de lo anterior se instauró el Procedimiento sancionador identificado con la clave **UT/SCG/Q/GGM/JD01/CHIH/84/2022**.

Bajo el contexto expuesto, el estudio y resolución de la queja presentada por Graciela González Mercado será objeto del procedimiento señalado en el párrafo anterior, ya que de otro modo se dictarían dos resoluciones que incluso pudieran ser contrarias y además trastocaría el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa o infracción.

TERCERO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas al *PVEM*, se cometieron en diversas fechas, en las cuales tuvieron vigencia diversos ordenamientos jurídicos, sin perder de vista que todos ellos contienen exactamente las mismas reglas respecto al derecho a la libertad de afiliación a los partidos políticos, como se desarrollará con amplitud más adelante en este mismo instrumento resolutivo.

En efecto, conforme a lo anotado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, la Unidad Técnica realizó diversas diligencias a fin de esclarecer la fecha de afiliación¹⁰⁴ de las personas quejas al *PVEM*, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

¹⁰⁴ El *PVEM* no aportó cédula de afiliación de Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos y Erika Escobedo Castro

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i>	Fecha de afiliación <i>PVEM</i>¹⁰⁵
1	Sergio Tirado de la Cruz	17/10/2018	15/10/2018
2	Jesús Eduardo Solís Hernández	15/11/2016	15/11/2016
3	Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar	15/08/2019	15/08/2019
4	Lilia Pineda Méndez	16/03/2019	10/05/2019
5	Tania Sucel Pérez Cruz	29/03/2019	29/03/2019
6	María Dilery Nuricumbo Paredes	17/03/2019	17/03/2019
7	Yadira Ponce Aguilar	08/12/2016	08/12/2016
8	Noemí Morales Sixtos	16/02/2020	16/02/2020
9	Graciela González Mercado	01/11/2019	01/11/2019 La cédula de afiliación no contiene fecha
10	Itzayana Noriko Vallejo Casillas	08/11/2016	08/11/2016
11	Rosa María Intzin Meza	20/05/2019	20/05/2019
12	Rodrigo Abonza Salazar	27/09/2019	27/09/2019
13	Adriana Medeguín Olvera	13/01/2020	30/11/2019
14	Diana Paola Casillas Torres	03/12/2019	07/11/2019
15	Gloria Puga Ruíz	30/07/2019	29/07/2019
16	Martin Leobardo Soría	05/12/2019	01/10/2019
17	Raúl Cruz Calvo	22/04/2019	22/04/2019
18	Adileni de Jesús Cruz García	03/04/2019	03/04/2019
19	Erika Escobedo castro	14/10/2019	14/10/2019

[El énfasis se refiere a fechas distintas]

Del análisis de las quejas que motivaron el procedimiento que nos ocupa, se advierte que las personas quejasas fueron incorporadas al padrón de militantes del denunciado con posterioridad al veintitrés de mayo de dos mil catorce, por lo tanto, la licitud de las afiliaciones cuestionadas será analizadas a la luz de la *LGIFE*.

¹⁰⁵ Visible a fojas 259 a 260 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

En cuanto a las reglas procedimentales aplicables al presente procedimiento, serán las contenidas en la LGIPE, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la LGIPE, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**¹⁰⁶.

CUARTO. EFECTOS DEL ACUERDO INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se

¹⁰⁶ Véase <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.

- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de las personas a los partidos políticos, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido Acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en su archivos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.

2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva a válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

Como se ha señalado con antelación, las personas quejas alegaron la violación a su derecho de afiliación libre y voluntaria para tomar parte en los asuntos públicos de país, así como el uso no autorizado de sus datos personales, en esencia, porque supuestamente fueron inscritas sin su consentimiento al padrón de militantes del *PVEM*.

1. Excepciones y defensas

Por su parte, el *PVEM* en sus distintas intervenciones procesales, medularmente, señaló en su defensa lo siguiente:

- El *PVEM* no afilió indebidamente a las personas quejas del presente procedimiento, ni utilizó, sin su autorización, sus datos personales para tal efecto, ya que su incorporación al padrón de militantes respectivos fue de manera libre y bajo el procedimiento establecido en sus estatutos.
- Que los datos personales utilizados en las afiliaciones cuestionadas fueron proporcionados voluntariamente por las personas quejas.
- Que las afiliaciones cuestionadas son lícitas, tal como se demuestra con el original de las cédulas de afiliación aportadas al sumario.
- Que, en el caso de Jesús Eduardo Solís Hernández, Yadira Ponce Aguilar e Itzayana Noriko Casillas Vallejo, su denuncia obedeció a la intención de participar como supervisores y/o capacitadores- asistentes electorales en el proceso electoral 2020-2021, ya que fueron afiliados en el 2016, sin que en el periodo 2016-2019, hayan presentado queja alguna.
- Que actualmente las personas quejas no se encuentran afiliadas al *PVEM*, ya que fueron dados de baja del padrón de militantes respectivo.
- Que no existe prueba alguna que demuestre la infracción atribuida al *PVEM*, sino que contrario a lo afirmado por las personas quejas y con base en las cédulas de afiliación aportadas, debe operar en su favor el principio de presunción de inocencia.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- Que el PVEM ha cumplido en tiempo y forma con el Acuerdo INE/CG33/2019.
- Que la cédula digital de afiliación de Rodrigo Abonza Salazar resulta valida porque contine los requisitos mínimos exigidos en el Acuerdo INE/CG231/2019 y las disposiciones legales aplicables.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como en la rendición de alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia y no con cuestiones de procedencia de la vía, competencia de esta autoridad electoral nacional, o con la personalidad de los quejosos, por lo que sus argumentos serán analizados al realizar el estudio del caso concreto.

2. Materia del procedimiento

Con base en las posturas expresadas por las partes, la materia del procedimiento en el presente asunto estriba en determinar si el *PVEM* conculcó el derecho a la libre afiliación en materia política que corresponde a las personas quejosas, quienes alegaron no haber consentido estar en sus filas, vulnerando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a); 456, párrafo 1, inciso a); de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y y), de la *Ley de Partidos*.

3. Marco normativo

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6°

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

*II. La información que se refiere a la vida privada y **los datos personales será protegida** en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

Artículo 16.

...

*Toda persona tiene derecho **a la protección de sus datos personales**, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

*III. Asociarse individual y **libremente** para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

...

*Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse **libre** e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.*

En esta medida, se considera que el derecho de asociación en materia político-electoral, como lo ha sostenido la *Sala Superior*, es un **derecho fundamental** consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, el cual propicia el pluralismo político, así como la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático, en el entendido de que sin su existencia, o de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, se puede concluir que el derecho de asociación en materia político-electoral, es la base de la formación de los partidos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y VI; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Ahora bien, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 de la *Constitución*, está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea, por un lado, pacífico; y por otro, que tenga un objeto lícito, mientras que la última, circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**¹⁰⁷.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente¹⁰⁸, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

En el ámbito internacional, el derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

¹⁰⁷ Consultable en la página:
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁰⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes (de asociarse) para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

En el espacio nacional, no obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y ocho años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

*a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que **suscriben el documento como manifestación formal de afiliación**, y*

*b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y **firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.**”*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación**.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó de manera expresa lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la **afiliación** individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, **cumplir sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con sus obligaciones**, señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hizo más tarde el *COFIPE* de quince de

enero de dos mil ocho y actualmente la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del otrora Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprobaron los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)*.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación, la *DEPPP* deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los mencionados Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional contaban o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los afiliados necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él,

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PVEM*

A efecto de tener mayor claridad acerca del proceso que un ciudadano o ciudadana debe llevar a cabo para convertirse en militante del denunciado, resulta necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PVEM*.

CAPÍTULO II

**De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes,
Adherentes y Simpatizantes**

Artículo 2.

...

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México es **individual, personal, intransferible, libre y pacífica**. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87. El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.

Artículo 88. El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.

Artículo 99. Para ser adherente es necesario tener 15 años cumplidos al día de la solicitud correspondiente, y tratándose de personas que tengan 18 años o más, aparte del trámite de solicitud tendrán que presentar su credencial para votar con fotografía.

Artículo 100. La persona interesada deberá presentar la solicitud ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente cumpliendo con los requisitos que establecen los presentes Estatutos.

D) Normativa emitida por este Consejo General

➤ **Acuerdo INE/CG33/2019**

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave **INE/CG33/2019**, por el cual se aprobó *“la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales”*, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN¹⁰⁹, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

¹⁰⁹ Partidos Políticos Nacionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

*Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.***

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

ACUERDO

PRIMERO. *Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.*

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

➤ **Acuerdo INE/CG231/2019**

Justificación del Acuerdo

9. Aplicación móvil para la captación de datos para las afiliaciones, ratificaciones o refrendos de la militancia de los PPN

Partiendo del marco jurídico expuesto, en el presente Acuerdo se establecen las bases para la operación de la aplicación móvil que el INE pone a disposición de los PPN que opte por su utilización, a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve, para la implementación del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los PPN, aprobado a través del Acuerdo INE/CG33/2019.

En el considerando 13 del citado Acuerdo se estableció que, para demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los ratificaciones o refrendos debían incluir, como mínimo, los elementos siguientes:

- I. Nombre completo;
- II. Clave de elector;
- III. Fecha de afiliación;
- IV. Domicilio completo; y,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

V. La manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, a través de la firma manuscrita digitalizada.

Asimismo, se dijo que tales elementos podrían recabarse a través de la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los PPN y que, además, los PPN debían incluir en la manifestación formal de afiliación, ratificación o refrendo, los requisitos que su normativa interna estableciera.

A fin de recabar los elementos mínimos citados, la aplicación móvil generará un expediente electrónico, el cual contendrá las imágenes siguientes:

- a) Anverso de la Credencial para Votar original;**
- b) Reverso de la Credencial para Votar original;**
- c) Fotografía viva de la o el ciudadano; y**
- d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.**

En el entendido que los datos relativos al nombre completo, clave de elector y domicilio de la o el ciudadano que manifiesta su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, serán extraídos del padrón electoral, a partir de la captura del anverso y el reverso del original de la Credencial para Votar que emite este Instituto a la ciudadanía, mientras que la fotografía viva y la manifestación de voluntad de afiliación, ratificación o refrendo con firma manuscrita digitalizada, será obtenidas directamente por la o el auxiliar, al momento de solicitar a la persona interesada la afiliación, ratificación o refrendo de su militancia.

Cabe señalar que la fotografía viva de la persona es un mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su Credencial para Votar emitida por el INE con la finalidad de afiliarla a un PPN sin su consentimiento o conocimiento. Es decir, al contar con la fotografía viva de la persona, **el INE cuenta con elementos que le permiten tener certeza de que la persona que está presentando el original de su Credencial para Votar expedida por este Instituto a la o el auxiliar del PPN, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está manifestando a través de su firma manuscrita**

digitalizada, su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar de manera libre e individual su militancia.

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Conclusiones

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean o no formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.
- Las y los militantes tienen el derecho de refrendar o renunciar a su militancia.
- La información que sea requerida en términos distintos a los señalados será atendida de acuerdo con las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Las ciudadanas y ciudadanos de la república tienen el derecho elegir libremente si desean permanecer como afiliados de un determinado partido político o ser dados de baja del mismo, si expresan su voluntad en ese sentido.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.
- En el Acuerdo INE/CG231/2019, se implementó como mecanismos alternativo de afiliación, la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los Partidos Políticos Nacionales, conformando un expediente electrónico que tendría como elementos mínimos: a) Anverso de la Credencial para Votar original; b) Reverso de la Credencial para Votar original; c) Fotografía viva de la o el ciudadano; y d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

4. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Lo mismo ocurre con aquellos documentos por medio de los cuales, acrediten haber dado trámite a las solicitudes de desafiliación correspondientes; pues son indispensables para sus procesos de depuración de los padrones de militantes.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, cualquiera que haya sido su objeto, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran expresaron una decisión individual y libre.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente **SUP-RAP-107/2017**¹¹⁰, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹¹¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹¹² y como estándar probatorio,¹¹³ como se ilustra en los párrafos subsecuentes.

¹¹⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹¹¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹¹² Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹¹³ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —*regla probatoria*— implica destacadamente **quién debe aportar los medios de prueba** en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —*estándar probatorio*— es un criterio para concluir **cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho**, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹¹⁴, ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia **cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

¹¹⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Así, cuando la acusación de algún ciudadano versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado su consentimiento, se deben satisfacer dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “*el que afirma está obligado a probar*” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, conforme al artículo 441 de la *LG/PE*, resulta aplicable supletoriamente el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, lo que implica, que la denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliada al partido denunciado.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en la denuncia que dio lugar al presente procedimiento sancionador, las personas quejas alegan que **no dieron su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostienen también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que los denunciantes no están obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones** y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado **alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, **la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar** las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación, a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia **no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna**, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

De tal suerte que si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En este sentido, resulta conveniente apuntar, por un lado, que con el propósito de justificar la afiliación de las personas denunciantes, el PVEM **únicamente** ofreció el **original de catorce cédulas físicas** de afiliación, correspondientes a igual número de personas quejosas, y **una cédula del expediente electrónico** de afiliación, *refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza Salazar* y, por otro lado, **respecto de Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos y Erika Escobedo Castro, no aportó medio de prueba alguno** para demostrar su legal afiliación, a pesar de las oportunidades procesales para ello, asumiendo así las consecuencias de esa falta de prueba.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIFE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.**

2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, para destruir la eficacia probatoria de los elementos de prueba aportados por su contraparte, quejoso y denunciado **deberán señalar con precisión los aspectos de la prueba que, a su parecer, constituyen defectos o deficiencias que le restan credibilidad; además, no basta con formular dicha objeción formal, para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario aportar, en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar los extremos de su objeción.**

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005¹¹⁵ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos*

¹¹⁵ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

*expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, **si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**¹¹⁶

¹¹⁶ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.*¹¹⁷
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.*¹¹⁸
- *DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*¹¹⁹
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS*¹²⁰
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)*¹²¹

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11¹²², dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

¹¹⁷ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

¹¹⁸ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

¹¹⁹ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

¹²⁰ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

¹²¹ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

¹²² Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29¹²³, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.***

Énfasis añadido

¹²³ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado **cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso**, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, **no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos**.

Lo anterior, atento a que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

Al respecto conviene precisar que tanto Tania Sucel Pérez Cruz como Rodrigo Abonza Salazar oportunamente objetaron la cédula de afiliación que los vincula políticamente como afiliados del PVEM, sin embargo, como se verá en lo subsecuente, este Consejo General estima que sus planteamientos resultan insuficientes para privarlas de eficacia demostrativa en virtud de que no se ajustan a lo establecido en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

5. Pruebas y acreditación de los hechos

A) Pruebas recabadas por la UTCE

1. **Correo electrónico** remitido desde la cuenta patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, enviado a la Unidad Técnica el veinticinco de noviembre de dos mil veinte,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

a través del cual informó el estatus de las personas quejasas como afiliadas del *PVEM*, la fecha en que fueron integradas al padrón de militantes y aquella en que fueron dadas de baja.

2. **Acta circunstanciada de inspección** a la página electrónica del *PVEM*, practicada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se constató que actualmente las personas quejasas no se encuentran como militantes del denunciado en sus plataformas públicas.

3. Correo electrónico remitido desde la cuenta alfredo.cid@ine.mx, correspondiente al Secretario Técnico Normativo de la DERFE, enviado a la Unidad Técnica el doce de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual remitió a este Instituto, la *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza Salazar*.

B) Pruebas aportadas por el *PVEM*

4. **Documental privada**, consistentes en el oficio PVEM-INE-198/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, a través del cual reconoció haber afiliado a las personas quejasas e informó la baja de su padrón de militantes, dando cumplimiento a lo ordenado por la autoridad sustanciadora mediante auto de seis de noviembre de dos mil veinte.

5. **Documental privada** consistente en el **original de catorce cédulas físicas de afiliación correspondientes a** Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Lilia Pineda Méndez, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria y Sergio Tirado de la Cruz, así como la impresión de la *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza Salazar*, mediante las cuales pretende demostrar la licitud de las afiliaciones cuestionadas.

C) Pruebas aportadas por Rodrigo Abonza Salazar

6. **Documentales privadas** consistente en copias simples a color de: a) credencial para votar con fotografía expedida por el INE; b) cédula profesional 8541338, expedida por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal; c) Cartilla del Servicio Militar con matrícula 6779655, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional; d) licencia de conducir expedida el H. Ayuntamiento municipal de Cutzamala de Pinzón, Guerrero; e) credencial de servidor público expedida por el INE; f) credencial de servidor público expedida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; g) 3 constancias de servicio público expedidas por el instituto Nacional de Estadística y Geografía; h) certificado de estudios de bachillerato expedido por la Universidad Autónoma del estado de Guerrero; i) certificado de estudios de licenciatura expedido por la Universidad Autónoma del estado de Guerrero; cinco constancias servicio público expedidas por el INE; documentales todas a nombre de Rodrigo Abonza Salazar, las cuales acompaño a su escrito de objeción de la cédula de afiliación respectiva.

D) Valoración de los medios de prueba

De los medios de prueba referidos con anterioridad, los listados en los numerales 1, 2 y 3 del inciso A), son pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la *LGIFE*; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Por otro lado, las pruebas identificadas con los numerales 4 y 5 del inciso B), y 6 del inciso C) en tanto documentales privadas, únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso

b), y 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIFE*; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

En este sentido, del análisis al contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

E) Conclusiones

1. Aun cuando las personas quejasas del presente procedimiento actualmente ya no forman parte del padrón de militantes del *PVEM*, **si fueron afiliadas** al mismo, en las fechas señaladas por la *DEPPP* y reconocidas por el mismo denunciado, de manera que la base fáctica del procedimiento que nos ocupa quedó demostrada.
2. El *PVEM* **aportó medios de convicción para demostrar la legal afiliación** de Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Lilia Pineda Méndez, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dillery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria, Sergio Tirado de la Cruz y Rodrigo Abonza Salazar.
3. Aun cuando el denunciado aportó el original de la cédula de afiliación de Lilia Pineda Méndez, se estima que carece de eficacia demostrativa porque la fecha de afiliación contenida en dicha documental es posterior a la registrada por la *DEPPP* y reconocida por el mismo denunciado, tal como se verá en lo subsecuente, esto es, mientras que la fecha contenida en la documental es del diez de mayo de dos mil diecinueve, la referida en los registros de la *DEPPP* es del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve.
4. El *PVEM* **no aportó medios de convicción para demostrar la legal afiliación** de Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos y Erika Escobedo Castro, no obstante, la oportunidad procesal que tuvo en diversas

ocasiones, lo cual implica que **sus excepciones no hayan quedado demostradas.**

5. Los medios de prueba aportados por el quejoso Rodrigo Abonza Salazar no resultan pertinentes, ni idóneos, para demostrar las afirmaciones que sostienen la objeción a la cédula de afiliación que lo vincula políticamente como afiliado del PVEM. Además de que, al tratarse de copias simples únicamente generan indicios en cuanto al contenido de dichos documentos, respecto de sus originales.
6. El *PVEM* demostró haber dado de baja a las personas quejasas, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ello derivado del requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, es decir, fuera del plazo concedido en el Acuerdo INE/CG33/2019.

En las relatadas circunstancias, este colegiado puede arribar a la convicción de que Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria, Sergio Tirado de la Cruz y Rodrigo Abonza Salazar **fueron afiliados voluntaria y libremente** al *PVEM*, obteniendo tanto su consentimiento como la autorización para el uso de sus datos personales para tal efecto, mientras que Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, **fueron indebidamente incorporados** al padrón de militantes del *PVEM*, utilizando para ello, sin autorización, sus datos personales.

6. Caso concreto.

A. Afiliaciones ilegales

- **Afiliaciones sin cédula (Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos y Erika Escobedo Castro).**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejasas, es preciso advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas, un hecho antijurídico electoral.

Posteriormente, verificar que este hecho sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral, se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocida en la legislación de este país, la libertad de la ciudadanía de afiliarse, permanecer afiliada, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno; además del derecho que tiene la ciudadanía de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, identificados con el número de Resolución CG617/2012, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución al denunciado, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y sanción respectiva.

Para ello, esta autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obra en el expediente, a partir del cual es posible arribar al descubrimiento de la verdad de manera directa, en el caso del análisis de las pruebas plenas, o bien, de manera indirecta o circunstancial, al obtener indicios incriminatorios, entendidos estos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de otro conocido.

En este sentido, debe decirse que, en casos como el que nos ocupa, relacionados con la presunta afiliación indebida de una persona a un partido político, corresponde al quejoso demostrar la existencia del hecho en que se basa su inconformidad, es decir, la existencia de la afiliación tachada de ilegal, así como el señalamiento del denunciado, es decir, el partido político que supuestamente realizó la conducta infractora.

Al respecto, conviene destacar que, si el denunciado afirma que las personas quejasas consintieron en ser incorporadas al padrón de militantes respectivo, es decir, que la afiliación objetada fue voluntaria y libre, entonces **deberá demostrar**,

con los elementos correspondientes, que los denunciantes sí expresaron su voluntad para ser registradas como militantes del instituto político en cuestión.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "*el que afirma está obligado a probar*", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así las cosas, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que, en el caso, la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, pues este afirmó que la afiliación de las personas quejasas a su padrón de militantes fue voluntaria y libre, y no a dichos ciudadanos acreditar que no solicitaron su inclusión en dicho padrón, porque ello implicaría imponerles una carga desmedida para demostrar hechos negativos.

En efecto, como quedo apuntado, la carga probatoria para demostrar la licitud de las afiliaciones que nos ocupan correspondía PVEM y no a las personas quejasas, como inexactamente refiere para exculparse de la infracción que se le atribuye.

En suma, como se razonó en el apartado anterior, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP, la DERFE y el mismo denunciado, que las personas quejasas se encontraban incluidas en el padrón de militantes del PVEM, esto es, los hechos consistentes en la afiliación de las citadas ciudadanas, cuya licitud se discute, han quedado plenamente demostrados.

Bajo esta óptica, demostrado el hecho debatido, corresponde verificar si la causa por la cual se alega su ilicitud se encuentra acreditada, es decir, si las personas quejasas solicitaron o no ser incluidas en el padrón de militantes del partido político justiciable, para lo cual era menester autorizar el uso de sus datos personales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

En este sentido, no obstante que el *PVEM* afirmó que las afiliaciones cuestionadas fueron voluntarias, lo cierto es que **no demostró con elemento de prueba alguno**, en los casos que nos ocupan, que tales registros fuesen resultado de la voluntad libre e individual de los citados ciudadanos y ciudadanas; esto es, no evidenció que las referidas personas quejasas hayan expresado de manera inequívoca su consentimiento para ser afiliadas y menos permitir el uso de sus datos personales para el fin mencionado, a pesar de que tuvo diversas oportunidades procesales en las que no realizó manifestación alguna entorno a la cuestión debatida y pretendió exculparse bajo el argumento de que la carga probatoria correspondía a las personas quejasas y no a dicho Instituto, de manera que, pese a tener la carga de la prueba, el *PVEM* no justificó que las personas denunciantes hubiesen consentido integrarse a sus filas.

Bajo este contexto, resulta inconcuso que en el caso concreto, la carga de la prueba correspondía al *PVEM*, ya que, en esencia, sostuvo, por un lado, que sí cumplió las normas constitucionales y legales que tutelan el derecho fundamental de afiliación y, por otro, que las personas quejasas manifestaron su libre voluntad de afiliarse a dicho Instituto, de tal manera que asumió así el deber de probar dicho aserto, sin que en la especie lo haya cumplido. De esta suerte, al no estar soportados con medio de prueba alguno, los argumentos defensivos del denunciado, las excepciones opuestas resultan ineficaces.

En este sentido, tal y como quedó expuesto en apartados anteriores, la libertad de afiliación en materia político-electoral es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e incluso, no pertenecer a ninguno.

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas resulta igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, demostrar en todo momento, que cualquier acto que implique la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a éste, deben estar amparados indefectiblemente en el documento que demuestren el consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— siendo ineficaz cualquier alegato en el sentido de que tal actividad rebasa la capacidad operativa y de respuesta del denunciado para cumplir con el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho.

Del mismo modo, no pasa inadvertido para esta autoridad electoral nacional que el PVEM señaló que la denuncia presentada por Jesús Eduardo Solís Hernández obedeció a su intención de participar como supervisor y/o capacitador-asistente electoral en el proceso electoral 2020-2021, y no a una indebida afiliación porque dicho quejoso fue afiliado en el 2016 y en el periodo 2016-2019, no presentó queja alguna, sino que fue hasta el 2020 para participar en dicho proceso electoral. Al respecto, este Consejo General estima que tales afirmaciones resultan una apreciación subjetiva que no se encuentra robustecida con medio de prueba alguno, motivo por el cual no anulan la antijuridicidad de la referida afiliación y deben desestimarse por ineficaces.

➤ **Afiliación con cédula de fecha posterior a la informada por la DEPPP (Lilia Pineda Méndez).**

Respecto a la afiliación Lilia Pineda Méndez, esta autoridad electoral nacional estima que resulta indebida y acredita plenamente las infracciones denunciadas, en virtud de que la voluntad de Lilia Pineda Méndez fue obtenida de manera posterior a la fecha de afiliación informada por la DEPPP y reconocida por el propio denunciado en diversas intervenciones procesales, tal como se ilustra en la gráfica siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

No.	Nombre de la persona quejosa	Fecha de afiliación proporcionada por la DEPPP	Fecha de afiliación proporcionada por el PVEM ¹²⁴	Fecha de afiliación contenida en la cédula de afiliación
1	Lilia Pineda Méndez	16/ <u>03</u> /2019	16/ <u>03</u> /2019	10/ <u>05</u> /2019

En efecto, como se advierte del cuadro anterior, la afiliación de la citada quejosa ocurrió el **dieciséis de marzo de dos mil diecinueve**, tal como lo informó la DEPPP y lo reconoció el mismo denunciado de manera previa a la fecha en que aportó la documental cuestionada, de la cual se desprende una fecha de afiliación posterior, esto es, el **diez de mayo de dos mil diecinueve**, es decir, dos meses después a lo informado por la DEPPP.

En este sentido este Consejo General estima que la documental aportada por el denunciado debe surtir sus efectos a partir de la fecha en que la quejosa manifestó su voluntad, esto es, del diez de mayo de dos mil diecinueve en adelante, de manera que la documental bajo análisis no puede surtir efectos retroactivos como lo pretende el denunciado para justificar la incorporación de Lilia Pineda Méndez a su padrón de militantes, porque, al menos antes de la fecha contenida en la cédula de afiliación aportada por el PVEM, se afilió a la citada quejosa sin demostrar su libre voluntad para tal efecto. De este modo, al no aportar medio de prueba alguno que justifique de manera eficaz la incorporación de Lilia Pineda Méndez, conforme a la fecha informada por la DEPPP, este Consejo General considera que dicha afiliación resulta indebida y actualiza de manera plena las infracciones denunciadas.

No resulta óbice para sostener lo anterior que el PVEM haya obtenido la cédula de afiliación Lilia Pineda Méndez durante el plazo referido en el acuerdo INE/CG33/2019, porque este tenía como finalidad que los partidos políticos depuraran sus padrones, a través de la revisión de sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en tales circunstancias lo que excluía de responsabilidad al denunciado, en términos del citado acuerdo, era la obtención de una cédula que

¹²⁴ Visible a fojas 259 a 260 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

refrendara o actualizara la previa afiliación de la quejosa, lo cual no aconteció en el caso.

Tampoco anula la antijuridicidad en la conducta del denunciado, la falta de objeción a la citada cédula de afiliación por parte de Lilia Pineda Méndez, porque tal omisión no puede convalidar un acto jurídico ante la falta de uno de sus elementos esenciales como lo es el consentimiento o voluntad de la quejosa y menos otorgarle eficacia alguna.

En suma, a partir del material probatorio existente en autos, y de las manifestaciones de las partes, en virtud de que el denunciado no demostró que Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, hayan manifestado libremente su consentimiento para ser incorporadas a su padrón de militantes, ni para usar sus datos personales para tal fin, además de que manifestó expresamente no contar con las cédulas de afiliación respectiva, con excepción de la correspondiente a Lilia Pineda Méndez que resulta ineficaz, esta autoridad electoral nacional concluye que las infracciones que nos ocupan, quedaron **plenamente acreditadas**.

B. Afiliaciones legales

- **Afiliaciones con cédula (Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria, Sergio Tirado de la Cruz y Rodrigo Abonza Salazar)**

Como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, al dar contestación al emplazamiento, el *PVEM* afirmó que la militancia de las personas quejasas estuvo precedida de su voluntad libre e individual, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales, tal como se acreditó con la *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Salazar, así como el original de las cédulas de los quejosos restantes señalados en este apartado, las cuales acompañó a su escrito.

Al respecto, cabe resaltar que la Unidad Técnica, mediante proveídos de dieciséis de febrero del año próximo pasado y diecinueve de septiembre de la presente anualidad, dio vista a las personas quejosas con copia del original de las cédulas físicas de afiliación y de la *Cédula del expediente electrónico de afiliación*, respectivamente, concediéndole un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a dichos documentos.

Dicho proveído fue notificado personalmente a los citados inconformes sin que, a excepción de Tania Sucel Pérez Cruz y Rodrigo Abonza Salazar, hayan realizado objeción alguna para demeritar el contenido y eficacia probatoria de las cédulas de afiliación referidas, conforme a lo señalado en los resultandos XIII y XVIII de la presente resolución.

En el mismo sentido, cabe recordar que, como se puso de manifiesto en los antecedentes de la resolución que nos ocupa, la Unidad Técnica puso los autos a la vista de las partes mediante acuerdos de veintiocho de julio de dos mil veintiuno y diecinueve de septiembre de la presente anualidad, sin que, en estas nuevas oportunidades procesales, a excepción Rodrigo *Abonza Salazar*, comparecieran las citadas personas quejosas a formular conclusiones tendentes a restar eficacia probatoria a las cédulas aportadas por el denunciado.

Por todo lo antes razonado, atento que el *PVEM* aportó prueba idónea y suficiente para acreditar que la afiliación de las citadas personas quejosas fue libre y voluntaria, sin que, a excepción de Tania Sucel Pérez Cruz y Rodrigo Abonza Salazar, cuestionaran su autenticidad y contenido, se debe concluir que la afiliación que nos ocupa se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

Por otro lado, no pasa inadvertido para esta autoridad nacional la discrepancia que existe en las fechas contenidas en los formatos afiliación proporcionadas por el PVEM y las fechas informadas por la DEPPP, conforme a lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i>	Fecha de afiliación <i>PVEM</i> ¹²⁵
1	Sergio Tirado de la Cruz	17/10/2018	15/10/2018
2	Adriana Medeguín Olvera	13/01/2020	30/11/2019
3	Diana Paola Casillas Torres	03/12/2019	07/11/2019
4	Gloria Puga Ruíz	30/07/2019	29/07/2019
5	Martin Leobardo Soría	05/12/2019	01/10/2019

No obstante, como puede advertirse, la diferencia en las fechas de afiliación de Sergio Tirado de la Cruz, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruíz y Martin Leobardo Soría, no incide en su licitud, ya que la voluntad de dichas personas quejasas de militar en las filas del denunciado consta de manera anterior en las cédulas de afiliación aportadas por el PVEM, lo que, en todo caso, sugiere que lícitamente fueron afiliados antes de que el partido las registrara formalmente ante la autoridad nacional. En efecto, dicha inconsistencia no anula la voluntad de las personas quejasas porque no incide en uno de sus elementos esenciales como es el consentimiento, sino que en todo caso se debe a una aspecto formal (fecha) y a la falta oportuna del PVEM de dar de alta a dichas personas en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos operado por el INE.

Con todo lo anterior en mente, este colegiado estima que **no se acreditó la falta denunciada**, puesto que el denunciado, para justificar las afirmaciones en que basó su defensa, ofreció el original de las cédulas de afiliación de las personas quejasas referidas, así como la *cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza Salazar*, sin que fuesen objetadas, con las excepciones anotadas, no obstante, las oportunidades procesales para ello.

Por último, resulta importante destacar que aun cuando los hechos denunciados en el presente procedimiento no actualizan una infracción a la normatividad de la materia, debe tenerse presente que las personas quejasas alcanzaron su pretensión, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados

¹²⁵ Visible a fojas 259 a 260 del expediente

del PVEM, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la DEPPP y del acta circunstanciada levantada por la UTCE se advierte que las mismas fueron dadas de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

b.1 Afiliación de Rodrigo Abonza Salazar

Como se precisó en el apartado anterior, para demostrar la libre militancia partidista, el PVEM aportó la *cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Rodrigo Abonza Salazar*, cuya autenticidad fue corroborada por la DERFE.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido en las razones de la Jurisprudencia 3/2019, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político**. De lo anterior se sigue que el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, tanto el PVEM como la DERFE, allegaron a los autos la cédula electrónica de afiliación de Rodrigo Abonza Salazar, la cual, es una documental privada, que se encuentra integrada por diversos elementos, a saber, **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta) y **firma manuscrita digitalizada** que fueron recabados a través de la aplicación móvil por el propio partido político. En este sentido, si bien la citada documental no tiene *per se* una eficacia demostrativa plena, si podría, apreciada en su contexto y concatenada con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, llevar a esta autoridad electoral a otorgarle eficacia demostrativa para tener por lícita la afiliación discutida. Desde esta perspectiva, no se podría afirmar que dicho documento, sin prueba en contrario, carezca de validez alguna, ya que, a *prima facie*, su licitud debe presumirse.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Al respecto, si bien es cierto que el citado quejoso objeto la prueba que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del *Reglamento*, el cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente a la *carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político*, en concepto de este Consejo General las afirmaciones vertidas por Rodrigo Abonza Salazar y las copias simples de las documentales que acompaña en su escrito de objeción, son insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente electrónico de afiliación que obra en autos, con el cual se demuestra su militancia voluntaria al partido denunciado, toda vez que aun cuando desconoce su afiliación, y concretamente solicita la prueba pericial en materia de grafoscopía, agregando medios de prueba para contrastar la firma dubitada, lo cierto es que tanto la prueba pericial ofertada como las documentales ya referidas, **no son idóneas ni pertinentes** para demostrar que la firma contenida en la citada *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político sea apócrifa*.

Bajo este contexto, conforme a lo establecido en párrafos anteriores, debe concluirse que, las manifestaciones de Rodrigo Abonza Salazar que sostienen la causa de pedir para desvirtuar la licitud del expediente electrónico que lo vincula políticamente al denunciado son ineficaces, ya que dicha cédula, como se precisó previamente cuenta con elementos mínimos de certeza que fueron previstos precisamente para asegurar que en las afiliaciones que los partidos políticos llevan a cabo de manera electrónica, se cuente con la manifestación de voluntad de las personas a las que se afilia.

Los razonamientos anteriores encuentran sustento en las razones esenciales de la Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11 de rubro *DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS* e *III.1o.C. J/29, de rubro DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*.

Bajo esta óptica, si el citado quejoso sostuvo la falsedad de la firma contenida en la cédula de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del *PVEM*, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo de manera genérica en

cuanto a la obligación que concierne a las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que debe justificarse plenamente, máxime, si se consideran que la citada cédula es una prueba directa para arribar al conocimiento de la verdad de los hechos que nos ocupa, por ende, quien afirme u falsedad asume el deber de probarla.

En conclusión, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de Rodrigo Abonza Salazar haya sido producto de una acción ilegal por parte del PVEM, pues como se dijo, el expediente electrónico de afiliación que obra en el expediente, además de contener **la firma manuscrita digitalizada**, cuenta con la **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta) del citado quejoso, por lo tanto, se estima que el PVEM lo incorporó lícitamente a su militancia partidista.

➤ **Objeciones**

Como se apuntó en acápites anteriores Tania Sucel Pérez Cruz y Rodrigo Abonza Salazar objetaron las cédulas de afiliaciones aportadas por el denunciado para sostener la licitud de su militancia partidista, en este sentido, con el propósito de determinar los alcances y eficacia de los planteamiento sostenidos por las referidas quejosas, resulta pertinente su análisis bajo los razonamientos siguientes:

a. Tania Sucel Pérez Cruz

Dicha quejosa manifestó:

“ . . .

Que la afiliación de la campaña Verde Ecologista de México, no fui afiliada con mi consentimiento de la fecha 29 de marzo de 2019, además en el formato con el folio 2019-0702187, tiene muchas irregulares, escolaridad, número teléfono, celular y firma. . .”

Como puede advertirse, la citada objeción no se ajusta a lo establecido en el artículo 24 del reglamento de Quejas y Denuncias en tanto que, si bien es cierto la quejosa expone vagamente diversas irregularidades, lo cierto es que **no controvierte** de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

manera frontal la autenticidad de la prueba y sus alcances, ni señala las razones concretas en que apoya su causa de pedir y menos, aún, aporta elementos idóneos para demostrar las irregularidades referidas, en tal sentido, conforme a lo razonado en acápites anteriores y bajo los criterios de interpretación invocados en dicho apartado, este Consejo General estima, que la objeción materia de estudio resulta ineficaz para anular la licitud de la cédula de afiliación cuestionada, en tanto que demuestra la libre voluntad de Tania Sucel Pérez Cruz para militar en el PVEM, autorizando el uso de sus datos personales para tal efecto.

b. Rodrigo Abonza Salazar

Dicho quejoso manifestó:

“ . . .

El archivo digital de la cédula aportada por dicho partido es apócrifo por aparecer inscrito indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados. Ya que no cuenta con la voluntad del ciudadano para afiliarse, ratificar, ni mucho menos refrendar su militancia a ese Partido Político Nacional... Señalando lo siguiente:

Primero.- Tengo una prueba que anexar que es una copia de la credencial de elector, con folio #1069053698678, donde se muestra mi firma y datos y que dicha firma no es igual a la aportada por el Partido Verde Ecologista de México. . .

Aunado a lo anterior el quejoso aporta copia de su credencial de elector como medio de prueba idóneo, no solo para justificar las razones que sostienen su objeción, sino también para contrastar la firma tildada de falsa con la indubitada que aparece en la citada credencial de elector. . .

Segundo.- Las pruebas ofrecidas por el Partido Verde Ecologista de México las cuales están conformadas por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la credencial para votar original, la fotografía viva que presentan del ciudadano y sobre todo la firma manuscrita digitalizada de Rodrigo Abonza Salazar presentada por el Partido Verde Ecologista, aspecto que no reconozco de la prueba que presentan es que la firma manuscrita digitalizada de Rodrigo Abonza Salazar, no corresponde a la firma que utilizó para todos mis documentos personales, de los cuales anexo copias simples, como lo son copia de mi cédula profesional, copia de la cartilla del servicio militar, copia del certificado de la Universidad, copia del certificado de preparatoria, copia de credencial del INEGI, copia de credencial del INE, copia de documentos del INE...

Tercero. – Para determinar si la firma cuestionada es autentica o apócrifa... le solicito de una forma respetuosa que ordene la práctica de una prueba pericial en materia de grafoscopia para el análisis de la firma contenida en la cédula

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

de afiliación de Rodrigo Abonza Salazar, con el objeto de determinar si la misma corresponde al puño y letra del quejoso o si por el contrario resulta falsa como afirma el denunciante.”

Al respecto, este Consejo General considera que la objeción planteada por el quejoso y la prueba pericial en materia de grafoscopia solicitada, no resultan inatendibles por las razones siguientes:

En principio, es importante precisar que el medio de prueba idóneo para sostener la causa de pedir de la objeción planteada, en torno a que la firma plasmada en la cédula no corresponde con la de la denunciante, es la prueba pericial en grafoscopia, grafología o caligrafía, pues únicamente a través una persona con conocimientos científicamente avanzados o experta en un arte u oficio, que requieren conocimientos especiales puede dilucidar una cuestión como la que nos ocupa, es decir, únicamente un perito en la materia puede corroborar que la firma del puño y letra de una persona no corresponde con la plasmada en el documento cuestionado.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio orientador emitido por el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29126, que sostuvo lo siguiente:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, **debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.**

[Énfasis añadido]

¹²⁶ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

Ahora bien, en el caso concreto **Rodrigo Abonza Salazar** desconoció la firma plasmada en el expediente electrónico aportado por el PVEM y autenticado por la DERFE, además, acompañó a su escrito de objeción diversos documentos en copia simple de donde se desprenden diversas firmas indubitadas, a efecto de contrastarlas con la firma cuestionada y demostrar que ésta última es apócrifa.

En ese sentido, si bien esta autoridad considera que el quejoso contravirtió de manera frontal la firma plasmada en el expediente electrónico de referencia, este órgano electoral, considera que la prueba pericial en materia de grafoscopía resulta inatendible, ya que su desahogo no conduciría a un fin práctico, en tanto que no resulta pertinente ni idónea para demostrar la falsedad de una firma digitalizada, porque, en estricto sentido, aunque los rasgos y trazos sean reputados a la autoría de una persona, su impresión digital varía de aquella que se estampa físicamente en un papel.

Al respecto resulta ilustrativo, lo señalado por la *Sala Superior* en la Jurisprudencia 62/2002, la cual tiene el siguiente contenido:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- *Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado*

los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.

De dicho criterio jurisprudencial se advierte que los procedimientos administrativos sancionadores electorales deben observar entre otros el principio de idoneidad, el cual hace referencia a que las diligencias sean aptas para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se deben limitar a lo objetivamente necesario.

En este contexto, si bien el medio de prueba idóneo para cuestionar la autenticidad de una firma es la prueba pericial en grafoscopia, grafología o caligrafía, en el caso al tratarse de una firma digitalizada, la cual fue captada mediante la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”, dicho medio de prueba no resulta ni idóneo ni pertinente para dilucidar la cuestión debatida porque técnicamente resulta imposible.

Sobre este tópico, existen diversos precedentes respecto de procedimientos de la misma naturaleza del que ahora nos ocupa, sustanciados ante la UTCE, en los que peritos especializados de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República han sostenido, en esencia, que si los documentos en que obra la firma cuestionada se encuentran en copia fotostática, no son idóneos para realizar un estudio técnico y emitir un dictamen apegado a derecho, ya que se pierden características gráficas de suma importancia como:

1. Inicios
2. Finales
3. Presión muscular
4. Enlaces especiales
5. Soluciones de continuidad
6. Velocidad de ejecución

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

7. Elementos de pequeña proporción también conocidos como signos de puntuación
8. Tildes

Lo anterior, aunado a que las firmas o escritura que se encuentran en copias fotostáticas [aun tratándose de copias certificadas] son proclives a fotocomposiciones o fotomontajes en cualquiera de sus partes, por lo cual no es posible emitir una opinión grafoscópica en documentos de dicha naturaleza.

Dicho criterio, ha sido reiterado por los peritos especializados de la Fiscalía General de la República en los siguientes precedentes, solo por citar algunos:

Expediente	Resolución	Fecha de resolución
UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018	INE/CG526/2019	20/11/2019
UT/SCG/Q/CG/252/2020	INE/CG339/2022	09/05/2022
UT/SCG/Q/GHH/JD23/MEX/196/2020	CG338/2022	09/05/2022

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta el resultado realizado a la consulta que en su oportunidad, de forma general, realizó la autoridad instructora a la Fiscalía General de la República, con el propósito de conocer a profundidad si existía algún medio, técnica o disciplina, que pudiese dar solución o de la cual se pudiese concluir, con grado de veracidad, si una firma originada en medio electrónico, puede ser sujeta de análisis para corroborar su autenticidad respecto del autor de la signatura.

En respuesta a lo señalado, mediante correo electrónico, el Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, informó lo siguiente:

[...]

*Derivado de su solicitud contenida en el oficio número INE-UT/04413/2022 y del informe de fecha 30 de mayo del 2022, firmado por la persona perita Lic. Carmen Guillermina Romero López, en atención a la misma, le comparto que después de un segundo análisis realizado por el departamento de documentos cuestionados, se concluyó que una firma digital o electrónica no es elemento de estudio, en virtud de que, **para realizar un estudio en firmas es rigurosamente necesario que las mismas sean originales**, lo cual no acontece en el presente caso de estudio.*

Por otro lado, si bien es cierto que existen algunos softwares que dicen hacer comparativos en firmas digitales o electrónicas, también lo es, que los expertos de la Agencia de Investigación Criminal no realizan dictámenes en esa modalidad ya que desconocen su fiabilidad y funcionalidad, siendo que aún dichos softwares se encuentran en fase experimental.

*Por último, sería conveniente replantear los esfuerzos del INE a cuestiones diferentes, permitiendo que otros medios probatorios idóneos acrediten sus pretensiones.
[...]*

[Énfasis añadido]

Aunado a lo anterior, a dicho correo adjuntó el oficio 28935 signado por la persona perita del Departamento de Documentos Cuestionados de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, informó lo siguiente:

“ ...

El laboratorio del departamento de documentos cuestionados, dependiente de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República para emitir un dictamen en grafoscopia, necesariamente los documentos que se someterán a estudio (cotejo y cuestionados), deben ser originales, homólogos y coetáneos, ya que la grafoscopia es totalmente comparativa.

Es de hacer hincapié, que no se trata de coincidencias, en virtud, que este laboratorio se encuentra acreditado bajo la Norma Internacional ISO/IEC/17025-2017, Lo que implica que todas las personas peritas de este laboratorio de documentos cuestionado deben de constreñirse a los lineamientos propios de este Laboratorio. En tal virtud, y bajo estas circunstancias, todo experto de este laboratorio deberá realizar el informe respectivo.

Las firmas digitalizadas, son imágenes de una firma autógrafa que se transfiere al medio digital con el uso de un escáner. Las electrónicas son encriptaciones o cifrados de datos, de naturaleza fundamentalmente legal. Lo cual evidentemente para este laboratorio no son elementos idóneos para estudio grafoscópico, ya que inconcusamente nunca presentaran las características propias de una firma original, en virtud, que en la grafía ológrafa son observables características propias como: cambios de presión, tensión de línea, habilidad escritural, espacios intergrammales o espacios entre elementos, etc, etc. Particularidades que las firmas digitalizadas o electrónicas como ya se señaló, no presentan. Condiciones con las que no es

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

posible emitir opinión técnica, pues son existen elementos susceptibles de comparación...”

De lo señalado por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, se advierte que no existe un medio idóneo y eficaz para desahogar una prueba pericial respecto de firmas captadas por medios electrónicos, ya que no sería posible realizar el comparativo de las mismas, pues no presentan las particularidades propias de una firma original, aunado a que los softwares que refieren hacer comparativos de dichas firmas se encuentran en fase experimental y por tanto no se tiene acreditada su fiabilidad y funcionalidad.

En ese sentido, en el caso concreto, el ordenar la elaboración de un dictamen pericial en grafoscopia, no permitiría corroborar si la firma corresponde o no a la persona denunciante, ya que, como se precisó, se trata de una firma captada por medios electrónicos, la cual no resulta idónea para realizar el estudio técnico de la misma, a fin de demostrar su autenticidad respecto del autor a quien se le atribuye.

Por lo que, ordenar dicha prueba, bajo las condiciones previamente referidas, no permitiría alcanzar el fin pretendido, es decir, determinar si la firma plasmada en el expediente electrónico corresponde o no al quejoso y únicamente generaría actos de molestia a las partes, además de que retardaría innecesariamente la justicia pronta y expedita..

Se considera lo anterior, ya que, conforme al artículo 23, numeral 6, del Reglamento de Quejas y Denuncias, para el desahogo de la prueba pericial se deben atender las siguientes reglas:

- I. Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten fehacientemente su conocimiento técnico o especializado;*
- II. Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las preguntas específicas y concretas que considere pertinente;*
- III. Dar vista con el referido cuestionario tanto al denunciante como al denunciado, para que por una sola ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho cuestionario;*
- IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, integrará las preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al perito.*
- V. Someterá el cuestionario al desahogo del perito designado.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

VI. Una vez respondido el cuestionario, dar vista del mismo a los denunciantes y a los denunciados, para que expresen lo que a su derecho convenga.

Aunado a ello, en el expediente UT/SCG/Q/MMPG/CG/215/2018, se encuentra glosado el oficio AIC-CGSP-FOLIO:30573-25993, signado por el Perito Técnico Ejecutivo “B” de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informó que a efecto de emitir una pericial en grafoscopia necesitaba contar con los siguientes elementos:

“ ...

En relación a lo solicitado es de manifestar que es necesario contar con firmas autógrafas que obren en documentos, que se hayan realizado ante presencia de una autoridad.

A continuación, se enlistan posibles fuentes:

- *Expedientes de juicios ante instancias judiciales y ministeriales,*
- *Documentos oficiales (credencial IFE o INE), Pasaporte, Licencia de conducir, etc.)*
- *Trámites ante notarios o corredores públicos,*
- ***Los documentos para realizar los trámites ante el INE y el Registro Nacional de Electores,***
- *Tramites de Actas ante juzgados del Registro Civil (nacimiento y/o matrimonio), Libros del Registro Civil,*
- *Expediente laboral,*
- *Trámites y declaraciones ante el SAT.*
- *Trámites ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, etc...*

Así mismo se recabe la muestra de firmas, por personal a su digno cargo en la entidad federativa correspondiente, y una vez reunidos los elementos solicitados sean remitidos a este departamento de documentos cuestionados. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la encomienda que me fue conferida...”

Al referido oficio anexó un instructivo y 6 hojas, con diferentes indicaciones, en las que la persona denunciante debería plasmar su firma, a efecto de poder emitir un dictamen en la materia.

En suma, para el desahogo de una prueba pericial es necesario:

1. Designar un perito con conocimiento técnico o especializado;
2. Formular el cuestionario al que será sometido el perito:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

3. Dar vista a las partes con el cuestionario referido para que adicionen las preguntas que consideren necesarias;
4. Adicionar las preguntas que se consideren necesarias, previa calificación de la autoridad;
5. Solicitar a la persona denunciante que acuda ante personal de este Instituto Nacional Electoral a recabar las muestras de firmas establecidas por el perito;
6. Recabar documentos en los que obren las firmas autógrafas de la persona denunciante;
7. Con la documentación recabada, someter el cuestionario al desahogo del perito, y
8. Dar vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga con las respuestas al cuestionario emitidas por el perito.

Lo que, en el supuesto como el que se analiza, genera una serie de cargas procesales para las partes innecesarias, en específico para el quejoso, que tendría que acudir ante personal de este Instituto a efecto de que se pudieran recabar las muestras caligráficas y firmas solicitadas por el perito, sin que al desplegar dicha actividad se puedan obtener los resultados esperados, pues como se precisó previamente, el ordenar el desahogo de una pericial en grafoscopia, no permitiría alcanzar el fin pretendido, es decir, determinar si la firma plasmada en el expediente electrónico corresponde o no a la persona quejosa

Ahora bien, es importante destacar que, si bien la cuestionada cédula electrónica, de la que se desprende la afiliación del quejoso al *PVEM*, fue obtenido a través de la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE” del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, lo cierto es que el mismo debe considerarse válido o auténtico, ya que goza de presunción en su autenticidad; lo anterior, de conformidad con los *Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional*, aprobados mediante Acuerdo INE/CG231/2019, del Consejo General de este Instituto, en los cuales se define lo siguiente:

‘...

p) *Expediente electrónico: Conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

un Partido Político Nacional, el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva de la o el ciudadano y la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.
...

Asimismo, conforme a dichos Lineamiento, se estableció que el objetivo de la aplicación móvil, era dotar a los partidos políticos nacionales, **de una herramienta tecnológica que permitiera hacer más eficiente, práctico y sencillo el proceso de captación de datos para acreditar la voluntad de la ciudadanía** de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, así como la creación de un expediente electrónico, el cual les serviría para automatizar e integrar los expedientes de sus militantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el considerando 13 y Punto de acuerdo Séptimo del Acuerdo del Consejo General identificado como INE/CG33/2019.

Ahora bien, es importante destacar que en el considerando 9 del referido Acuerdo INE/CG33/2019, se estableció, en lo conducente, lo siguiente:

“ . . .

*En el considerando 13 del citado Acuerdo se estableció que, para demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los ratificaciones o refrendos debían incluir, **como mínimo**, los **elementos** siguientes:*

- I. Nombre completo;*
- II. Clave de elector;*
- III. Fecha de afiliación;*
- IV. Domicilio completo; y,*

V. La manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, a través de la firma manuscrita digitalizada.

Asimismo, se dijo que tales elementos podrían recabarse a través de la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los PPN y que, además, los PPN debían incluir en la manifestación formal de afiliación, ratificación o refrendo, los requisitos que su normativa interna estableciera.

A fin de recabar los elementos mínimos citados, la aplicación móvil generará un expediente electrónico, el cual contendrá las imágenes siguientes:

- a) **Anverso de la Credencial para Votar original;**
- b) **Reverso de la Credencial para Votar original;**
- c) **Fotografía viva de la o el ciudadano; y**
- d) **Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.**

*En el entendido que los datos relativos al nombre completo, clave de elector y domicilio de la o el ciudadano que manifiesta su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, serán extraídos del padrón electoral, a partir de la captura del anverso y el reverso del original de la Credencial para Votar que emite este Instituto a la ciudadanía, **mientras que la fotografía viva y la manifestación de voluntad de afiliación, ratificación o refrendo con firma manuscrita digitalizada, será obtenidas directamente por la o el auxiliar, al momento de solicitar a la persona interesada la afiliación, ratificación o refrendo de su militancia.***

*Cabe señalar que **la fotografía viva de la persona es un mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su Credencial para Votar emitida por el INE con la finalidad de afiliarla a un PPN sin su consentimiento o conocimiento. Es decir, al contar con la fotografía viva de la persona, el INE cuenta con elementos que le permiten tener certeza de que la persona que está presentando el original de su Credencial para Votar expedida por este Instituto a la o el auxiliar del PPN, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está manifestando a través de su firma manuscrita digitalizada, su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar de manera libre e individual su militancia.***

*Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en su sesión de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, al resolver los expedientes SUP-JDC-5/2019 y acumulado, en los que se impugnó el similar INE/CG1478/2018, por el que este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho expidió el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin; señaló que la toma de la fotografía viva mediante la aplicación móvil, no constituye un requisito adicional, **sino un mecanismo de seguridad y certeza de las afiliaciones, además de que la medida resulta conforme con el bloque de constitucionalidad,** así como con el marco legal que rige para el ejercicio del derecho de asociación en relación con el derecho de la protección de datos personales.*

*...”
[Énfasis añadido]*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

De lo anterior se advierte que si al momento de la afiliación del quejoso, el procedimiento de suscripción utilizado en este caso por el PVEM, fue totalmente digital, es decir, que no se generó alguna impresión en papel al momento de su emisión, por lo cual, el formato electrónico se considera documento válido para acreditar la afiliación que nos ocupa.

En suma, al no haber prueba alguna que acredita que la respectiva firma plasmada en el expediente electrónico referido no corresponde al quejoso que se analiza en el presente apartado, debe prevalecer en favor del PVEM el principio de presunción de inocencia y con ello, tenerse, a la afiliación de Rodrigo Abonza Salazar como libre y voluntaria, dando lugar a la inexistencia de la infracción denunciada.

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia **21/2013**, emitida por la Sala Superior, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**. Que establece que la presunción de inocencia *implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.*

Además, como se precisó previamente la referida cédula de afiliación electrónica consta de otros elementos como son credencial para votar por ambos lados, datos personales de la persona interesada y fotografía viva.

En relación con lo anterior, es importante destacar que el Lineamiento Tercero, numeral 1, inciso r) de los **LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITE RECABAR LOS DATOS E INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA PARA AFILIARSE, RATIFICAR O REFRENDAR SU MILITANCIA A UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL** define a la fotografía viva como:

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

*Fotografía viva: Imagen de la persona que libre e individualmente manifiesta su voluntad de afiliación, ratificación o refrendo a un Partido Político Nacional, tomada a través de la aplicación móvil **en el momento en que se encuentra presente ante una o un auxiliar.***

...
Énfasis añadido

Por su parte el Lineamiento Décimo Primero, numeral 10, de los referidos *Lineamientos* establece lo siguiente:

...
La o el auxiliar solicitará a la o el ciudadano la captura de la fotografía de su rostro a través de la aplicación móvil, a efecto de que esta autoridad cuente, en su caso, con los elementos necesarios para constatar la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN. En caso de negativa de la o el ciudadano, no podrá continuar con el procedimiento de obtención del expediente electrónico . . .“

En este contexto, se considera que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, toda vez que la cédula respectiva cuenta con elementos como la fotografía viva, elemento que se estableció como un mecanismo para dotar de certeza las afiliaciones y respecto del cual la propia quejosa reconoce que se trata de su persona.

Similar consideración estableció el *Consejo General*, entre otras, en las determinaciones INE/CG526/2019 e INE/CG338/2022, dictadas el veinte de noviembre de dos mil diecinueve y nueve de mayo de dos mil veintidós, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018 e UT/SCG/Q/GHH/JD23/MEX/196/2020.

Por lo anterior, al no haberse acreditado plenamente la responsabilidad del PVEM, este órgano colegiado considera pertinente declarar **infundado** el presente procedimiento.

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGPE*, relativo a la gravedad de la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado y el grado de participación fue como autor material del hecho ilícito con pleno dominio del hecho.	La conducta cuestionada fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las personas quejas, por parte del <i>PVEM</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas.

En el presente asunto, las disposiciones vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos y Erika Escobedo Castro, sin demostrar que obtuvo su consentimiento para incorporarlas, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley de Partidos.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el respeto de la prerrogativa señalada, a través de mecanismos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados.

Por otra parte, como se analizó, el denunciado utilizó los datos personales de las personas quejasas como lo son, el nombre y la clave de elector, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, circunstancias que deben considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PVEM*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La conducta infractora **fue singular**, pues aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, incluyendo su normativa estatutaria, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de las personas quejasas, tal circunstancia no implica *per se* un concierto o pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación por parte del instituto político denunciado, quien, como ya se dijo, incluyó en su padrón de militantes a las personas quejasas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción de la conducta infractora debe valorarse las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

a) Modo. En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuida al *PVEM*, consistió en incluir en su padrón de afiliados a las personas quejasas, sin haber recabado su voluntad para pertenecer a las filas del instituto político citado, inobservando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la *Ley de Partidos*.

b) Lugar y Tiempo. En el caso concreto, las afiliaciones controvertidas sucedieron en las fecha y lugar que se cita a continuación:

No	Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
1	Jesús Eduardo Solís Hernández	15/11/2016	Hidalgo
2	Noemí Morales Sixtos	16/02/2020	Guanajuato
3	Erika Escobedo Castro	14/10/2019	Ciudad de México
4	Lilia Pineda Méndez	16/03/2019	Chiapas

Como puede advertirse de la tabla que antecede, la afiliación de Jesús Eduardo Solís Hernández aconteció con anterioridad a la aprobación del Acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad preponderante, consistía en asegurar la precisión y confiabilidad de los padrones de militantes de los partidos políticos de manera que, al no contar con la documentación soporte que demostrará la voluntad de la persona afiliada, los Partidos Políticos Nacionales debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante y, de no conseguirlo en los plazos marcados, proceder a dar de baja a los militantes respecto de quienes no contaran con la manifestación de voluntad respectiva, sin que, contrariamente a lo afirmado por el *PVEM*, la baja de los quejosos haya ocurrido de esta manera, ya que el denunciado desafilió a los quejosos el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, es decir, diez meses después de la fecha señalada en el citado Acuerdo.

Del cuadro referido también se advierte que Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez fueron afiliados con posterioridad a la fecha señalada en el Acuerdo INE/CG33/2019, para que los Partidos Políticos regularizaran su

padrón de militantes. Circunstancias que resultan relevante para el caso que nos ocupa y serán tomadas en consideración al momento de imponer la sanción que, en su caso, resulte aplicable.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Este Consejo General considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

- El *PVEM* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PVEM* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Aunado a lo anterior, la conducta del *PVEM* resulta dolosa porque:

- Las personas quejasas negaron haber consentido su registro o incorporación como militante del *PVEM*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- Quedó acreditado que las tres personas denunciantes referidas, se encontraban inscritas en el padrón de militantes del *PVEM*, conforme a lo informado por el denunciado y la *DEPPP*.
- El partido político denunciado no aportó medio de prueba alguna para demostrar que las afiliaciones cuestionadas se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, de manera que estuviera sustentada en la expresión libre y voluntaria de las personas denunciantes. Contrariamente, manifestó no contar con medio de prueba alguno y pretendió arrojar la carga de la prueba a los citados ciudadanos y ciudadanas.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM* se cometió al afiliar indebidamente a Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, sin demostrar el acto volitivo de éstas para ingresar en su padrón de militantes, así como para proporcionar sus datos personales con ese fin.

Lo anterior independientemente que a la fecha de la resolución que nos ocupa, las personas quejasas, ya no formen parte del padrón de militantes del denunciado, pues la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las personas denunciantes citadas, otorgaron o no su consentimiento expreso para ser afiliadas, de modo que

la fecha en que hayan sido dadas de baja resulta irrelevante para anular la infracción cuestionada o exculpar al PVEM de la responsabilidad por los hechos que nos ocupan, pues la infracción se actualizó en el momento mismo en que el denunciado las afilió indebidamente y continuó hasta que la dio de baja, lapso en el que el denunciado actuó ilícitamente.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

➤ Afiliaciones sin reincidencia

En el caso de la afiliación de Jesús Eduardo Solís Hernández, **no existe reincidencia**, puesto que, de conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En efecto, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado la identificada con la clave INE/CG448/2018, a través de la cual, el once de mayo de dos mil dieciocho, resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, el seis de junio del mismo año, ya que fue confirmada mediante el SUP-RAP-137/2018.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que la afiliación de Jesús Eduardo Solís Hernández aconteció con anterioridad al dictado de la resolución

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

referida, esto es, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se estima que **no existe reincidencia**.

➤ **Afiliaciones con reincidencia**

En el caso de Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez la afiliación denunciada ocurrió el dieciséis de febrero de dos mil veinte, el catorce de octubre de dos mil diecinueve y el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, respetivamente, esto es, con posterioridad al once de mayo de dos mil dieciocho, fecha en que el *PVEM* fue sancionado dentro del procedimiento UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 —resolución INE/CG448/2018, confirmada mediante SUP-RAP-137/2018— por infracciones de igual naturaleza. En este sentido, resulta claro que la conducta que hoy se atribuye al denunciado **sí resulta reincidente**, ya que, pese haber sido sancionado por una conducta de igual naturaleza, nuevamente afilió de forma indebida a diversas personas, esto es, incorporó a las personas quejosas a su padrón de militantes sin su voluntad, lo cual implica una transgresión a la normatividad electoral, que debía observar con mayor cuidado porque ya pesaba una resolución en su contra por hechos similares.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

En efecto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Bajo este contexto, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las referidas personas quejas al *Partido Verde Ecologista de México*, pues se comprobó que éste las afilió sin demostrar que medió su voluntad para pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas estriba en garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, con la correlativa obligación de cada partido político, de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las personas denunciadas, se dispuso indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PVEM*.
- No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del *PVEM* respecto de la afiliación de Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez.

Así, en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el denunciado infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejosas, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

➤ Afiliación sin reincidencia

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que han quedado acreditadas la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es necesario aplicar una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIFE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras cuestiones**, la gravedad de la conducta; la necesidad de *suprimir* prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Desde esta óptica, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) está compelido a ponderar, **casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que** converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserto en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y, consecuentemente, no administrar una justicia **completa**, contrario a lo previsto por la Norma Fundamental.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Lo anterior es relevante porque, si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en reiteradas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, como el que ha quedado demostrado a cargo del *PVEM*, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGPE*, consistente en **una multa** por cada una de las personas en cuyo agravio se cometió la infracción.

En efecto, es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General **INE/CG33/2019**”, tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PVEM*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desea o no militar en una fuerza política,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en acatamiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto de acuerdo TERCERO, se ordenó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de los ciudadanos hoy quejosos de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las actividades ordenadas a los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

En este contexto, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

*los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*¹²⁷, mediante el cual, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, informó al *Consejo General* que **los siete partidos políticos, -entre ellos el PVEM- durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo INE/CG33/2019.**

En este tenor, a partir de la información recabada por esta autoridad relacionada con la baja de los ciudadanos quejosos de sus padrones de militantes, entre ellos los quejosos del presente procedimiento, y de las acciones emprendidas en acatamiento al mencionado acuerdo, en términos de lo informado por la *DEPPP*, se puede concluir que el hoy denunciado atendió el problema de fondo que subyacía al tema de afiliaciones indebidas, al depurar su padrón de militantes, garantizando con ello el derecho de los ciudadanos de libertad de afiliación política; lo anterior, en congruencia con las razones esenciales previstas en la Tesis de Jurisprudencia **VII/2019**, emitida por el Tribunal Electoral de rubro **MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**

En efecto, en observancia al citado Acuerdo, la *Unidad Técnica* instruyó al *PVEM* para que procediera a eliminar de su padrón de militantes el registro de las personas denunciantes en este procedimiento administrativo sancionador; lo anterior, para el supuesto de que aún se encontraran inscritos en el mismo, tanto en el *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos* de la *DEPPP*, así como de su portal de internet **y/o cualquier otra base pública** en que pudieran encontrarse, debiendo aportar los medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones.

Al respecto, debe mencionarse que la instrucción dada al citado instituto político fue oportunamente cumplimentada y corroborada por la *DEPPP*, por lo que hace al *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, como por la *UTCE*, respecto del portal de internet del partido político referido.

Con base en ello, esta autoridad destaca las conclusiones siguientes:

¹²⁷ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto a la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avale las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este *Consejo General* emitió el Acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos, las y los ciudadanos quienes, en realidad, hayan solicitado su afiliación.
- En relación con lo anterior, el *PVEM* atendió el problema subyacente a las indebidas afiliaciones, eliminando de su padrón de militantes el registro de las personas quejasas en el presente procedimiento, tanto en el *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, como de su portal de internet, así como la realización de aquellas actividades ordenadas por este Consejo General a través del acuerdo INE/CG33/2019, a que se ha hecho referencia anteriormente.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PVEM* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es trascendente valorar también las acciones realizadas por el responsable **con posterioridad a la comisión de la infracción**, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

**INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO
JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE,
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

AUTORIDAD RESPONSABLE.¹²⁸ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

Del modo anterior, este Consejo General considera que la actitud adoptada por el PVEM, respecto de Jesús Eduardo Solís Hernández, cuyo caso se analiza, si bien no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió, puesto que la infracción quedaría impune, debe ser ponderada para fines de la individualización de la sanción que le corresponda, aproximando la sanción al extremo inferior del rango de las previstas por la LGIPE, toda vez que el proceder del PVEM redundaría en la vigencia del orden jurídico; en la protección al derecho de libre afiliación de los

¹²⁸ Consultable en la página
<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

ciudadanos tutelada, incluso, por los propios partidos políticos —como el denunciado—; y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior es así, ya que, de conformidad con lo informado por la *DEPPP*, se advirtió que durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, el *PVEM* informó sobre los avances y la culminación de las tareas encomendadas mediante el citado acuerdo, lo que revela su actitud de atender la problemática fundamental, con la finalidad de depurar su padrón de agremiados y salvaguardar el derecho de libertad de afiliación en materia política.

Aunado a ello, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*, aprobado por este Consejo General, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, específicamente, con los incisos d) y e) del apartado denominado “VIII. CONCLUSIONES GENERALES”, es posible destacar que:

1. Al treinta y uno de enero de dos mil veinte, los partidos políticos nacionales ya no contaban con registros en el estatus “en reserva”.
2. Los partidos políticos nacionales en acatamiento del Acuerdo INE/CG33/2019, instrumentaron las acciones necesarias para publicar en sus páginas de Internet, los padrones de personas afiliadas con la misma información contenida en la página del Instituto.

Lo anterior, bajo el interés de que los padrones de personas militantes se integren exclusivamente con aquellas ciudadanas y ciudadanos que así lo decidan y las personas puedan contar con fuentes de información ciertas y accesibles para conocer con toda veracidad si se encuentran afiliadas a un partido político.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral **se justifica la reducción de la sanción que previamente había impuesto este órgano superior de dirección, por una de menor entidad,**

establecida en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGIPE, consistente en una amonestación pública, pues tal medida, permitiría lograr la finalidad del acuerdo multicitado, además que con ella se incentiva a los partidos políticos a colaborar con esta autoridad en la supervisión, actualización y consolidación de un registro de su militancia partidaria, certero y confiable.

Con base en lo expuesto en el presente apartado, y en razón de que la sanción que se impone consiste en una **amonestación pública**, resulta innecesario, en el caso de la afiliación de Jesús Eduardo Solís Hernández, el análisis de las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades.

1. Afiliaciones con reincidencia

Con base en los lineamientos expuestos, es pertinente recordar que este Consejo General mediante Acuerdo INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017 —resolución confirmada mediante SUP-RAP-137/2018_ determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento.

No obstante lo anterior, con posterioridad al dictado de dicha resolución, el denunciado afilió indebidamente a Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, lo cual, como ya se dijo, actualiza una conducta reincidente porque al igual que en el citado procedimiento, en la causa que nos ocupa la conducta del infractor trastocó normas de igual naturaleza consistentes en la violación al derecho de libre afiliación del ciudadano.

Bajo este contexto, resulta claro que la conducta del infractor revela un mayor desprecio por la norma, porque a pesar de que ya había sido sancionado por una infracción de la misma índole, reincidió en su conducta cuando lo debido era un mayor respeto a la norma, de ahí que la infracción que nos ocupa revele una especial atención y se justifique una mayor reprochabilidad.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- Que las afiliaciones indebidas fueron realizadas el dieciséis de febrero de dos mil veinte, el catorce de octubre de dos mil diecinueve y el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, respetivamente.
- Que se concluyó la existencia del dolo
- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante, pues afilió a Noemí Morales Sixtos y Lilia Pineda Méndez durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, mientras que respecto de Erika Escobedo Castro, la incorporó después de concluir su vigencia.
- Que la conducta del infractor es reincidente porque ya había sido sancionado por una conducta de igual naturaleza.
- Que las citadas quejas fueron dadas de baja del padrón de militantes el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a que fenecieron los efectos del Acuerdo INE/CG33/2019.

Por ello, con base en los razonamientos vertidos en acápites anteriores esta autoridad considera adecuado imponer, por cada una de las afiliaciones en la que se actualiza la **reincidencia**, una multa de **1,284** Unidades de Medida y Actualización (mil doscientas ochenta y cuatro UMA's) vigentes al momento de la comisión de la conducta.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**¹²⁹

Cabe precisar que iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por

¹²⁹ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**, además de las resoluciones dictadas bajo los acuerdos **INE/CG168/2021** e **INE/CG1675/2021**.

Así, a juicio de este Consejo General, por las razones hasta aquí expuestas, se considera que la multa impuesta al *PVEM*, constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sobre todo como en el caso que nos ocupa, aquellas relacionadas con nuevos registros de militantes, que no cuenten con el respaldo que acredite la libre afiliación de las y los ciudadanos que figuran en el padrón de afiliados de un partido político

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA	Sanción por imponer
1	Noemí Morales Sixtos	1,284	16/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
2	Erika Escobedo Castro	1,284	14/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
3	Lilia Pineda Méndez	1,284	16/03/2019	\$84.49	\$108,485.16
Suma de multas					\$328, 524.24

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PVEM* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que aun cuando la infracción cometida por el *PVEM* causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no reportó un beneficio o lucro para el infractor, o en daño o perjuicio económico causado a las personas quejasas, de manera que no es pertinente realizar una cuantificación de la incidencia monetaria que pudo haber tenido el ilícito cuyo estudio nos ocupa.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PVEM* le corresponde para el mes de noviembre de este año, por concepto

de ministración mensual para actividades ordinarias y permanentes, la cantidad de \$19,751,300.62 (diecinueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos pesos 62/100 MN).

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

A consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, por la totalidad de las personas denunciantes, el porcentaje de 1.01 % (uno punto cero uno por ciento) de sus ministraciones correspondientes al mes de noviembre de la presente anualidad.

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PVEM** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PVEM** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹³⁰ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el **PVEM**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la *Ley de Medios*, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. No se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y el uso de datos personales de Jaime Alfonso Vázquez Zaldívar, Tania Sucel Pérez Cruz, María Dilery Nuricumbo Paredes, Rosa María Intzin Meza, Raúl Cruz Calvo, Adileni de Jesús Cruz García, Yadira Ponce Aguilar, Itzayana Noriko Vallejo Casillas, Rodrigo Abonza Salazar, Adriana Medeguín Olvera, Diana Paola Casillas Torres, Gloria Puga Ruiz, Martín Leobardo Soria y Sergio Tirado de la Cruz, en términos de lo razonado en el Considerando **QUINTO** de esta resolución.

¹³⁰ Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

SEGUNDO. Se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales de Jesús Eduardo Solís Hernández, Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, por las razones expuestas en el Considerando **QUINTO** de esta resolución.

TERCERO. Se impone una **amonestación pública** al *PVEM*, en los términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de Jesús Eduardo Solís Hernández.

CUARTO. Se impone una multa al *PVEM*, en los términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de Noemí Morales Sixtos, Erika Escobedo Castro y Lilia Pineda Méndez, conforme a la tabla siguiente:

Nº	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA	Sanción por imponer
1	Noemí Morales Sixtos	1,284	16/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
2	Erika Escobedo Castro	1,284	14/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
3	Lilia Pineda Méndez	1,284	16/03/2019	\$84.49	\$108,485.16
Suma de multas					\$ 328, 524.24

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México deberá ser deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que, por concepto de actividades ordinarias permanentes, reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando **SEXTO**.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios; así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo establecido en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

SÉPTIMO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de hacer efectiva la sanción impuesta al *PVEM*, una vez que la misma haya causado estado.

Notifíquese personalmente a las personas quejosas en el presente asunto, al *PVEM* por conducto de su representante ante este Consejo General de este Instituto, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral**; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de tipo de sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JESH/JD04/HGO/130/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**